



**GUADALAJARA, JALISCO, 27 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE.**

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE GUADALAJARA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO.**

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 19 diecinueve de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, [REDACTED], por su propio derecho, promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 23 veintitrés de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda, consistentes en:

- Las Cédulas de Notificación de Infracción números de folio 271333919, 271637357, 258333845, 203919212, 283917827, 284393244, 224479352, 221033116, 225806225, 229383981, 224762836, 224831030, 225199949 y 232513756, emitidas por la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco;
- Cédulas de Notificación de Infracción folio 3925530 y 3916749, emitidas por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco.
- Crédito fiscal número 18124010313, actualizaciones y recargos derivados del Refrendo Anual de Placas Vehiculares de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, así como los Requerimientos con números de folio F615124003252, F615124000743, F615124004539, F615124005831, F615124003954 y F615124007740, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió, requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a la autoridad con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibida que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Con fecha 14 catorce de febrero del año 2020 dos mil veinte, se tuvo a las autoridades, a excepción de la Secretaría del Transporte del Estado, contestando la demanda, oponiendo excepciones, defensas y causal de improcedencia, así como ofreciendo pruebas, de lo que se ordenó dar vista a su



contraria para que ampliara su demanda. Por lo que ve a la Secretaría del Transporte, se tuvo por no contestada la demanda, haciendo efectivos los apercibimientos de tener por ciertos los hechos que dejaron de contestar y las afirmaciones que el accionante pretendía acreditar con la exhibición de los actos reclamados.

4.- Con fecha 17 diecisiete de marzo del año 2020 dos mil veinte, se tuvo al actor ampliando su demanda en contra del Requerimiento con número de folio F418124007035 correspondiente al crédito número 18124010313 de la Secretaría de la Hacienda Pública, ordenando correr traslado a ésta para que produjera contestación, lo cual realizó, por lo que el día 9 nueve de noviembre siguiente, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se ordenó poner los autos a la vista de las partes para que dentro del término de 3 tres días formularan por escrito sus alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a fojas 18 dieciocho y 36 treinta y seis del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción VI, 336, 337, 399 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede examinar las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la parte demandada, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo del año 1991 mil novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: *“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”*.



La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 29 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa, en relación con el diverso artículo 30, fracción I, del mismo ordenamiento legal que *la ley de Ingresos del Estado de Jalisco es una disposición emanada por el Congreso; por lo que no resulta procedente analizar las normas que derivan de ella.*

La causal de improcedencia en análisis **se desestima**, toda vez que la misma encierra cuestiones que guardan relación con el fondo de la litis, las cuales serán tratadas por este juzgador en el Considerando siguiente, por lo que no es dable, por técnica jurídica en el pronunciamiento de la presente sentencia, el avocarse al estudio de los argumentos contenidos en la causal de mérito, cuando los mismos serán tratados con posterioridad. Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, localizable en la página 5 cinco, Tomo XV, enero de 2002 dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. *Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”*

IV.- Precisado lo anterior, procede analizar la litis planteada por las partes, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación, a saber:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. *De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se*



estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez."

V.- Atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana de los actos reclamados, para lo cual, la parte actora alega en el primer concepto de impugnación que desconoce los actos administrativos, revirtiendo la carga de la prueba a las demandadas.

Tomando en consideración que la Secretaría del Transporte del Estado y Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, no exhibieron los actos que se le imputan y, analizado el argumento vertido por el actor, se determina que le asiste la razón, a virtud que mediante acuerdo de fecha 14 catorce de febrero del año 2020 dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento a las autoridades demandadas respecto a tener por ciertos los hechos que el accionante pretendía acreditar con la exhibición de los actos reclamados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio 271333919, 271637357, 258333845, 203919212, 283917827, 284393244, 224479352, 221033116, 225806225, 229383981, 224762836, 224831030, 225199949, 232513756; 3925530 y 3916749, emitidos por la Secretaría del Transporte del Estado y la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, -los cuales dichas demandadas omitieron acompañar al juicio que nos ocupa, pese haber sido legalmente requeridas por esta Sala Unitaria- por cuanto a la ilegalidad de las mismas. En consecuencia, al no demostrar el mandamiento por escrito, debidamente fundado y motivado, para sancionar al promovente, se viola en su perjuicio las garantías previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con las fracciones I y III del numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, pues, tomando en consideración la manifestación de la parte actora que nunca le fueron notificados dichos actos administrativos, desconociendo su contenido, resultaba obligación para las autoridades, al contestar la demanda, demostrar su existencia mediante la exhibición de los citados documentos públicos, conforme al segundo párrafo del numeral 36 de la Ley de Justicia Administrativa, atento a la solicitud previa que presentó el demandante, a efecto que éste estuviera en condiciones de combatirlos mediante ampliación de demanda y, al no hacerlo de esa manera, procede declarar la nulidad lisa y llana de los actos reclamados, y sus accesorios, ello con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 74, en relación con la fracción II del diverso ordinal 75, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al emitirse en contravención a las disposiciones legales aplicables.



Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011, visible a fojas 2645 dos mil seiscientos cuarenta y cinco del Libro III, Tomo 4 cuatro, diciembre de 2011 dos mil once, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. *Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*
Contradicción de tesis 169/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.”

En consecuencia, al acreditar la ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 74, en relación con el diverso artículo 75, fracción II, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se declara la nulidad de los Requerimientos con números de folio F615124003252, F615124000743, F615124004539, F615124005831, F615124003954 y F615124007740, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, al tener su origen en un acto que ha sido declarado nulo y, por tanto, no pueden surtir efecto legal alguno, atento a lo establecido en la Jurisprudencia publicada con número de registro 252103, página 280 doscientos ochenta, Volumen 121-126, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. *Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”*

VI.- Por otro lado, respecto a los recargos y actualizaciones derivados de los derechos por refrendo anual de placas vehiculares por los ejercicios fiscales de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, emitidos por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la parte actora argumenta



en sus conceptos de impugnación que *los actos impugnados violentan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, además que nunca se le dieron a conocer los mismos.*

Por su parte la autoridad demandada, señala que *la prestación del servicio de la expedición del refrendo de tarjeta de circulación y holograma para un automóvil, motocicleta o de placas de denotación, es completamente diverso, ya que le implica al Estado un despliegue técnico distinto, en cada hipótesis, por lo cual es completamente legal y constitucional la diversificación de los cobros de los derechos multicitados.*

Visto lo argumentado por las partes y en atención a lo alegado por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, lo procedente es, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, **reconocer la validez** del crédito fiscal determinado por derecho de Refrendo Anual de Placas Vehiculares de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, al no desvirtuar la presunción de legalidad que gozan. Ello en razón que el actor únicamente hace referencia en sus conceptos de impugnación de forma genérica, cuestiones sobre la supuesta violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, no obstante, de la aplicación de las normas jurídicas a los accesorios en mención, no se advierte violación alguna a dichos principios constitucionales, puesto que los conceptos de actualización y recargos se aplican uniformemente a todos los particulares que se encuentran en el supuesto de hecho, en relación al monto del crédito adeudado, es decir, no se cobra mayor cantidad a unos que a otros respecto a una misma cantidad.

En esa misma tesitura, los recargos y actualizaciones derivados del crédito fiscal antes mencionado, son generados por el simple transcurso del tiempo ante la omisión puntual del pago de impuestos o derechos y los que, a diferencia de las multas y gastos de ejecución, no tienen vida jurídica propia, sino que se encuentran condicionados a la existencia de un crédito insatisfecho a cargo del contribuyente y no a la notificación de éste, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 71 del Código Fiscal del Estado, que dispone:

“Artículo 71. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha, o dentro del plazo fijado por las leyes fiscales, el monto del mismo se actualizará desde el mes que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, de conformidad con el artículo 68 de este Código. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco estatal por la falta de pago oportuno; dichos recargos se calcularán aplicando al monto de dicho crédito actualizado por el período a que se refiere este párrafo, la tasa establecida en la Ley de Ingresos del Estado por concepto de intereses, incrementada en un 50%.

Los recargos se causarán hasta por cinco años y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización por cheques devueltos a que se refiere el párrafo cuarto del artículo siguiente, los gastos de ejecución y las multas por infracciones a las leyes fiscales.

Cuando el pago hubiese sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia.



Los recargos se causarán a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, cuantificándose únicamente por el período transcurrido.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la Oficina de Recaudación Fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.

Cuando el contribuyente pague en forma espontánea y en una sola exhibición el total del crédito fiscal omitido, el importe de los recargos no excederá del 100% por ciento del crédito fiscal.

No se causarán recargos, cuando el contribuyente al pagar créditos fiscales en forma extemporánea, compense un saldo a su favor, hasta por el monto de dicho saldo, siempre que este se hubiera originado con anterioridad a la fecha en que debieron pagarse los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos de que se trate.

Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiera originado con posterioridad a la fecha en que se causaron los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que debieron pagarse éstos y la fecha en que se originó el saldo a compensar.”

De lo anterior, se concluye que los recargos y actualizaciones no se encuentran sujetas a la notificación del crédito fiscal adeudado, sino que se calculan desde el momento en que debió realizarse el pago y hasta la fecha en que se efectúe el mismo; de ahí, que se confirme la validez de los créditos fiscales por concepto de refrendo anual de placas vehiculares, recargos y actualizaciones, en la inteligencia que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Fiscal del Estado, la ignorancia de las leyes fiscales, no servirá de excusa ni aprovechará a persona alguna, máxime, que dicho pago deriva de la obligación establecida en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.

Consecuentemente, al no exponer diverso concepto de impugnación en contra del acto administrativo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, **se reconoce la validez** del crédito fiscal por los conceptos de actualizaciones y recargos derivados del Refrendo Anual de Placas Vehiculares por los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve.

No obstante, respecto al Requerimiento F418124007035 correspondiente al crédito número 18124010313, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública, visto lo argumentado por el demandante en ampliación de demanda, así como los actos administrativos impugnados visibles a fojas 36 treinta y seis a 38 treinta y ocho de autos, se determina que le asiste la razón, toda vez que los actos reclamados no cumplen con las formalidades establecidas en el Código Fiscal del Estado, para los Requerimientos y sus notificaciones, a virtud que no se realizó en forma personal, atento a lo dispuesto por el numeral 96 del citado cuerpo de leyes, a saber:



“Artículo 96.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio de la persona, a quien se deba notificar, y que haya señalado ante las autoridades fiscales, en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, se estará a las reglas del artículo 47 de este código. Dichas notificaciones podrán practicarse en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a quienes deba notificarse se presentan, por cualquier circunstancia en ellas, o en el lugar en que se encuentren, previa identificación.

Se entenderán con la persona que debe ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador, cerciorado de que sea el domicilio fiscal, dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere, a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más próximo.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, cerciorado nuevamente el notificador de lo establecido en el párrafo anterior y de negarse éste a recibirla se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio.

(...)

De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador levantará acta circunstanciada por escrito.

(...)”

En ese orden de ideas, del Acta de Notificación y citatorio, no se advierte que fuera notificado en forma personal al actor, su representante o a cualquier persona que pudiera hacerle llegar el mismo, a efecto que estuviera en oportunidad de atender la diligencia, así como tampoco precisa las razones por las cuales no se pudo dejar con el vecino más próximo, en caso de no haber nadie en el domicilio.

En tal circunstancia, lo procedente es, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, **declarar la nulidad** del acto administrativo reclamado consistente en la multa y gastos de ejecución contenidos en el Requerimiento con número de folio F418124007035 correspondiente al crédito número 18124010313, al lograr desvirtuar la presunción de legalidad que goza.

Por los motivos y fundamentos expuestos, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 72, 73, 74, fracciones I y II y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve en base a los siguientes

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- La parte actora acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas justificaron parcialmente sus excepciones y defensas, en consecuencia;



SEGUNDO.- Se declara la nulidad lisa y llana de los actos reclamados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con número de folio 271333919, 271637357, 258333845, 203919212, 283917827, 284393244, 224479352, 221033116, 225806225, 229383981, 224762836, 224831030, 225199949, 232513756; 3925530 y 3916749, emitidos por la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco y Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, así como de los gastos de ejecución y multa contenidos en el F418124007035 correspondiente al crédito número 18124010313, así como los diversos requerimientos con números de folio F615124003252, F615124000743, F615124004539, F615124005831, F615124003954 y F615124007740, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, atento a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos V y VI de la presente resolución, por lo que se ordena a las demandadas la cancelación de dichos actos, emitiendo el acuerdo correspondiente, realizando las anotaciones conducentes en el sistema informático con el que cuentan las autoridades.

TERCERO.- Se reconoce la validez de las actualizaciones y recargos derivados del Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto a los ejercicios fiscales de los años 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, al no desvirtuar la presunción de validez que gozan, atento a lo dispuesto en el último Considerando de la presente sentencia.

En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de ley establecido en el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa, y de conformidad con el artículo 109 del enjuiciamiento civil local aplicado supletoriamente en relación con el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de esta se haga en el boletín judicial quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JUDICIAL.

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

MAGISTRADO PRESIDENTE

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS

LLV/POC/mavc



La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.-----